

La lucha por el excedente del gas y la resignificación de las contradicciones de la identidad regional en Bolivia

Proyectos de dominación y resistencia en una región productora de hidrocarburos

**Carlos Vacaflores R.*
y Pilar Lizárraga A.****

* *Investigador y director de la Comunidad de Estudios JAINA (Tarija, Bolivia). Integrante del Grupo de Trabajo Desarrollo Rural de CLACSO.*

** *Investigadora de la Comunidad de Estudios JAINA (Tarija, Bolivia). Integrante del Grupo de Trabajo Desarrollo Rural de CLACSO.*

El conflicto social sobre los recursos naturales en Bolivia es una reedición actualizada de las antiguas contradicciones de la identidad nacional, que a decir de Prada (2004) se manifiesta en varios planos de las luchas sociales y, aunque aflora en las emblemáticas guerras del agua en 2000 y el gas en 2003, no se reduce sólo a la disputa por la recuperación de la propiedad de los recursos naturales y la lucha por su excedente, sino que constituye expresiones de la resistencia de los movimientos sociales al modelo de desarrollo excluyente expresado en un sistema político tradicional que no reconoce la diversidad cultural y que no genera beneficios para las grandes mayorías del país.

La diversidad de manifestaciones y movilizaciones, antes y después de la denominada Guerra del Gas (2003), nos muestra que esta no se reduce sólo a los acontecimientos de octubre de ese año, sino que puede ser comprendida como un proceso más amplio en el tiempo y que se va condensando en diversos momentos en los que los movi-

mientos sociales ejercen su fuerza para expresar una resistencia y cuestionamiento al modelo neoliberal con la consigna de la nacionalización de los hidrocarburos.

Un primer momento de la Guerra del Gas lo podemos ubicar ya desde el año 2000, a partir de las movilizaciones regionales de Tarija como departamento productor, que presiona para la venta del gas. Ello genera un debate y movilización en el Occidente boliviano en torno a la propiedad de los hidrocarburos, cuyo antecedente en tanto discurso lo podemos encontrar en la Guerra del Agua de 2000, donde ya se introduce el cuestionamiento al modelo privatizador de los recursos naturales. Este primer período presenta su desenlace en los acontecimientos de septiembre y octubre de 2003, protagonizados por movimientos sociales de las ciudades de El Alto, Cochabamba y Oruro¹ que, a través de una serie de medidas de presión y de enfrentamientos con los órganos de represión del estado, logran la declinación del presidente Sánchez de Lozada. Estos sucesos develan la crisis del modelo de desarrollo y la falta de legitimidad del sistema político tradicional. Fruto de esta resistencia surge la denominada "Agenda de Octubre", que plantea el compromiso del gobierno de convocar a la realización de la Asamblea Constituyente, espacio donde tendría lugar el debate sobre la nacionalización de los hidrocarburos.

Aparentemente los movimientos sociales logran tomar el control del gobierno al imponer su agenda en la priorización de la política nacional, lo cual genera una reacción de la clase dominante, que, aunque aturcida momentáneamente por el golpe de la destitución de Sánchez de Lozada, se repone rápidamente y reacciona ejecutando una serie de movidas políticas para posicionar una agenda propia y retomar el control del país.

Entre octubre de 2003, fecha en la que se da la sucesión constitucional, y el 10 de junio de 2005, con la declinación del gobierno de Carlos Mesa, se da un segundo momento de la Guerra del Gas (JAINA, 2005) que se caracteriza por el entrapamiento de la agenda política a partir del compromiso que el presidente Carlos Mesa asume tanto con los movimientos sociales como con la oligarquía del Oriente, generando una agenda paralela a la de Octubre, denominada "Agenda de Enero", que exige al gobierno la realización del referéndum por la autonomía y la elección de prefectos previo a la realización de la Asamblea Constituyente, con lo cual se inserta en la agenda política del gobierno la aparente inviabilidad de desarrollar una agenda única.

De esta manera se perfila la confrontación de visiones desde las "agendas", las cuales inicialmente se apoyan en la supuesta dicotomía territorial occidente-media luna propugnada desde las elites regionales de Tarija y Santa Cruz; pero que, paulatinamente, se van desprendiendo de este refuerzo del imaginario para constituirse en instrumentos de confrontación en sí mismas, cada vez más relacionadas a la confrontación de clases, naturaleza subterránea que finalmente empieza a aflorar en el discurso público del conflicto social boliviano.

“En medio de movilizaciones y manifestaciones que tienen paralizado al país y de las presiones de las élites regionales, que tienen visiones encontradas sobre la refundación de la nación y el tratamiento que se tiene que dar a la propiedad de los recursos, Carlos Mesa renuncia”

Durante el gobierno de Mesa el escenario nacional sigue marcado por intensas movilizaciones y medidas de presión de los movimientos sociales, que van evidenciando el incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno en octubre de 2003. El tratamiento de la Ley de Hidrocarburos es marcado por otra serie de movilizaciones que obligan al gobierno a desechar una primera propuesta y promulgar otra con fecha 17 de mayo de 2005. Esta nueva ley sigue cuestionada por los movimientos sociales y genera una mayor polarización entre las regiones del bloque de la media luna y los movimientos sociales del occidente.

La otra medida asumida por el gobierno mediante la promulgación del Decreto Supremo 28.195 en junio de 2005, que define la convocatoria a la Constituyente y al Referéndum, es duramente cuestionada por diferentes sectores. Para los movimientos sociales estas están desfasadas en el tiempo y no garantizan que el Congreso las viabilice. Tras estas medidas del gobierno, que son cuestionadas, en medio de movilizaciones y manifestaciones que tienen paralizado al país y de las presiones de las élites regionales, que tienen visiones encontradas sobre la refundación de la nación y el tratamiento que se tiene que dar a la propiedad de los recursos, Carlos Mesa renuncia y el Congreso se ve forzado a seguir la cadena de mando democrático que, al renunciar los presidentes de las cámaras (Mario Cossio y Hormando Vaca Díez) a pedido de los movimientos sociales, recae en el presidente de la Corte Superior de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, como nuevo mandatario de la nación.

El gobierno transitorio asumido en junio de 2005 por Eduardo Rodríguez Veltzé marca un siguiente momento de la Guerra del Gas. Este gobierno tiene como mandato del pueblo la convocatoria adelantada a elecciones nacionales y prefecturales en el mismo año. En este período se nota una tensa calma, y el conflicto en torno al gas viene adquiriendo otros matices: ahora se habla de la guerra de los impuestos, protagonizada por otros

actores, que exigen la asignación de los recursos de la venta del gas definidos por la nueva ley de hidrocarburos.

Los acontecimientos de los diferentes momentos de la Guerra del Gas nos muestran cómo el conflicto va asumiendo distintas facetas e incorporando en el escenario a diversidad de actores. Se hace evidente la confrontación entre los sectores dominantes y excluidos a partir de dos visiones de país: por un lado, la que no pretende cuestionar ni alterar las relaciones de poder que estructuran la sociedad nacional; y, por otro, la visión que busca transformar la estructura de las relaciones de poder para generar condiciones de inclusión de los vastos sectores marginados de la nación. La confrontación de estas dos visiones genera una exacerbación de las identidades, cuyo objetivo claro es demostrar la existencia de sectores poblacionales que son excluidos, marginados e invisibilizados de la realidad nacional. Pero no sólo se demanda reconocimiento, sino que simultáneamente se construye conciencia, en los sectores excluidos, de su propia condición de marginados y excluidos, y se genera rápidamente una polarización entre ambas posiciones, que ahora debaten visiones de país y proyectos de desarrollo diferentes en base al excedente que empieza a producir la venta del gas en los mercados regionales.

A lo largo de esta confrontación, pero especialmente durante el período de gobierno de Carlos Mesa, se produce una configuración territorial circunstancial de Bolivia en el imaginario de la pugna de discursos entre los sectores dominantes y los movimientos sociales. Las clases dominantes de Tarija y Santa Cruz, usando la intermediación de los Comités Cívicos, plantean que el país está claramente dividido en dos partes, una conformada por los departamentos andinos de Bolivia, donde explotan los movimientos sociales reivindicatorios del proyecto emancipatorio y a la que se trata de desvalorizar al identificarla como un “occidente convulso y decadente”; y una “media luna pujante y progresista” conformada por los departamentos relacionados con la llanura amazónica y chaqueña de Bolivia (Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni), donde aparentemente no habría movilizaciones sociales problemáticas, lo que por ende demostraría la vocación progresista de dichas regiones.

La emergencia de la denominada media luna fue un movimiento propiciado por la clase dominante de los departamentos que la forman, como una estrategia para posicionar el conflicto social en el plano de la confrontación de regiones y evitar así la construcción del escenario del conflicto en el plano de la lucha entre clases sociales, que es por otro lado la apuesta de los movimientos sociales. Con ello las clases dominantes aspiran a evitar el cuestionamiento de las relaciones de poder que generan las condiciones de atraso y pobreza de Bolivia, pero de las cuales ellos se benefician para acceder a un nivel de vida al cual no puede acceder la gran mayoría de los bolivianos.



© Martín Fernández

La estrategia de las clases dominantes es posicionar una agenda que ubique el discurso en la “regionalización” del conflicto, para lo cual enarbola la demanda de autonomías regionales como eje de su proyecto de desarrollo, mientras que los movimientos sociales enarbolan una demanda sobre el eje de la Asamblea Constituyente, que implica trabajar una refundación del país a partir de la crítica a las relaciones de poder actualmente establecidas.

A partir del uso masivo y monopolizante de los medios de comunicación, el discurso de la media luna logra imponer inicialmente su visión de conformación de la identidad nacional como “dos Bolivias” muy diferentes entre sí, expresadas en las regiones oriente y occidente, en el cual se busca resaltar el nexo de los sectores *conflictivos* con el occidente, y de los sectores *progresistas* con la media luna. Además, el discurso de la clase dominante busca demostrar que es representativo y totalmente legítimo de sus regiones, para lo cual se vale de la palestra de los Comités Cívicos departamentales, instituciones que supuestamente se constituyen por la confluencia de las diferentes instituciones que conforman las regiones departamentales, y por tanto voceros de los departamentos. Sin embargo, estos comités son cuestionados porque no representan a los sectores subalternos de las propias regiones, y estarían formados, según los movimientos sociales, por “los de la plaza” solamente, aludiendo a las familias tradicionales que viven en el centro de las ciudades capitales y que monopolizan el acceso al poder político y económico en el país.

Aun así, al principio los Comités Cívicos logran sortear esta crítica y consiguen mostrar en un primer momento una aparente cohesión de las identidades regionales, y por tanto una legitimidad del discurso regional que los sectores dominantes aspiran a representar. Sin embargo, el discurso de la aparente confrontación entre un occidente convulso y decadente y una supuesta media luna progresista, a pesar de tener un momento de fuerza, poco a poco se va diluyendo hasta quedar abandonado casi por completo en la actualidad, ya que los movimientos sociales logran reposicionar su discurso y demuestran la naturaleza contradictoria de la constitución de las identidades regionales, tal como ocurre en la escala nacional. Resulta ser que en todo el país existen las dos Bolivias: la de los ricos y la de los pobres, la de la clase dominante y la de los excluidos, la de los bloqueadores cuya única forma de hacerse oír es mediante el conflicto en las calles y los caminos, y la de los empresarios y políticos que se quejan de la mala imagen que dan los bloqueos y marchas de protesta en el exterior y no incorporan estas demandas en agendas de desarrollo nacional.

El conflicto por el gas en la región productora

En el departamento de Tarija se encuentra la mayor parte de las reservas de gas descubiertas hasta ahora en Bolivia, cerca del 80% del total nacional, y debido a un mecanismo de compensación directa previsto en la legislación boliviana, conocido como “regalías”, este departamento recibe según la nueva Ley de Hidrocarburos el 15% de las ventas del gas (anteriormente era el 11%, al cual se le suma el 4% como región productora). Considerando la magnitud de las reservas gasíferas presentes en suelo tarijeño, que superan los 40 trillones de pies cúbicos (TCFs) probados hasta el momento, el monto de las regalías asciende a cifras nunca antes disponibles para la administración pública departamental, cuyo presupuesto anual pasa, de manejar un poco más que un par de millones de dólares en los años previos a 2002, a manejar más de 60 millones de dólares en la gestión 2004, monto que en la gestión 2005 ya asciende a más de 130 millones de dólares.

Por otro lado, Tarija es un departamento que siempre se ha percibido como postergado de los esfuerzos del desarrollo nacional, cuyo accionar ha estado centrado en el denominado “eje central” de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, departamentos donde se han focalizado las políticas de inversión del desarrollo promovidas por el gobierno central de Bolivia. Debido a esta situación, la identidad regional tarijeña ha estado articulada históricamente en torno a los reclamos contra la política centralista del gobierno, tanto así que el nacimiento del Comité Cívico departamental está asociado a las luchas departamentales de la década del setenta por conquistar inversión de desarrollo para el departamento.

La movilización social en torno al gas se inicia en Tarija tempranamente, puesto que los trabajos de exploración de las empresas petroleras en la zona del subandino tarijeño y sus

***“La evolución
y potenciamiento
del criterio
de confrontación
entre regiones
[es promovida por]
la elite política
y económica tarijeña,
que busca asumir
un liderazgo regional
en el nuevo
escenario
de desarrollo
con las prometedoras
regalías”***

resultados preliminares ya eran conocidos por los políticos departamentales a fines de la década del noventa. Motivados por el descubrimiento de este recurso natural en territorio propio, y calculando los probables ingresos en concepto de regalías, la movilización regional se empieza a gestar entusiastamente en torno a la construcción de un proyecto departamental de desarrollo con la participación de todos los actores sociales de la región, para lo cual la prefectura realiza sucesivos eventos de planificación departamental participativa denominados “mesas de concertación” entre los años 2000 y 2003. Estas mesas no eran espacios legales, pero se implementaron de todas maneras como mecanismo interno de la prefectura para poder canalizar la evidente demanda de participación social en la planificación del desarrollo de Tarija.

Con la realización de las mesas se genera una sensación de cohesión en el imaginario del colectivo regional, reforzada a partir de la construcción de un plan departamental de desarrollo, y es desde este pacto social implícito que la elite regional inicia desde el departamento una campaña de presión sobre el gobierno central para agilizar la venta del gas.

La evolución y potenciamiento del criterio de confrontación entre regiones en el conflicto social nacional de este período (2003-2005) son promovidos a partir de los esfuerzos de la elite política y económica tarijeña, que busca asumir un liderazgo regional en el nuevo escenario de desarrollo con las prometedoras regalías, esfuerzo por demás justificado ante las perspectivas de controlar estos recursos desde las estructuras de poder ya establecidas. Para la elite tarijeña, en control de las instituciones estatales, políticas y Comités Cívicos, era evidente en ese momento que debería promover su legitimidad en el liderazgo si quería controlar dichos recursos, y por ende despliega una serie de estrategias destinadas a este fin. Estas incluyen el disfrazar de participativa a la planificación verticalista de la prefectura mediante las mencionadas mesas de concertación, y por otro lado descalificar a los poten-



© Comité de Derechos Humanos de Orellana, Red de Líderes Comunitarios Angel Shingre y Oficina de Pastoral Social del Vicariato de Aguarico

ciales adversarios, que claramente están latentes entre los sectores populares descontentos, para lo cual se tuvo que promover un discurso que concibe a la región como una entidad sin conflictos internos y con un solo proyecto de desarrollo, del cual ellos son los portavoces mediante el Comité Cívico.

Los datos sobre la existencia de megacampos gasíferos fue conocida en forma masiva en Bolivia recién a fines del año 2002 y principios de 2003, no tanto por la información gubernamental, sino más bien por la campaña del Comité Cívico tarijeño que exigía al gobierno acelerar la venta del gas a mercados norteamericanos vía un puerto chileno. La falta de celeridad gubernamental, y los cuestionamientos que empezaban a surgir desde diversos sectores de los departamentos de occidente, estimularon la emergencia del discurso regionalista tarijeño, con grandes impactos benéficos para los planes de la elite de dicha región, ya que la misma, "históricamente postergada", era sujeto nuevamente de la burla del "estado centralista, sangrón e indolente". Ante este agravio, la movilización regional tiende a ser unificada bajo el mando del Comité Cívico.

El discurso regionalista es propiciado a toda costa por la clase dominante en la estrategia de gestión del conflicto regional, y pasa de identificar inicialmente a un enemigo de Tarija en el estado centralista, a identificar a un enemigo de Tarija en los "collas" del "occidente convulso", en alusión a los movimientos sociales que se oponían a la venta del gas en esas condiciones iniciales, y que luego de la Guerra del Gas en octubre de 2003 imponen una agenda de gobierno que contraría los intereses de la clase dominante de la región (Vacaflores, 2005). A la luz de estos acontecimientos, la elite tarijeña articula su discurso regionalista con la elite de Santa Cruz, y se comienza a gestar el proyecto de la "media luna", con su ingrediente de la "nación camba", desde el cual se proyecta el dis-

curso de la "autonomía" como una contramedida al avance del proyecto popular de nacionalización y refundación del país.

El discurso regionalista se sustenta en la negación de las contradicciones internas de la región y busca reproducir las condiciones históricas que benefician a sus intereses de clase, esta vez bajo la consigna de la venta del gas para el desarrollo departamental. Esto no les sirve a los sectores excluidos al interior de las regiones, pues no reconoce su condición de exclusión ni incorpora sus necesidades y demandas de desarrollo, ya que ello implica reconocer las relaciones de dominación que configuran las relaciones sociales regionales, y por tanto cuestiona la legitimidad de la clase dominante como líder del proceso de desarrollo.

Consciente de este peligro, la elite tarijeña maneja un discurso de descalificación de cualquier intento de incorporar la visión de "lucha de clases" en la discusión de la problemática y el desarrollo regional. Así, cualquiera que no apoye al Comité Cívico en sus "justas reivindicaciones" es por supuesto *anti-tarijeño*, y la solución al problema del atraso y la pobreza en Tarija radica en mantener la "unidad incólume" de todos los tarijeños a toda costa, incluso negando la presencia de profundas contradicciones internas a lo largo de la historia.

Esta estrategia coyuntural de la clase dominante tarijeña, expresada en el discurso regionalista, no supo gestionar la inclusión efectiva de las demandas de los sectores excluidos en la planificación y ejecución de obras de inversión pública con los primeros ingresos de la venta del gas, circunstancia a partir de la cual se comenzó a gestar en los *excluidos* la conciencia de la naturaleza contradictoria de la identidad regional, y la conciencia de la naturaleza excluida de los sectores populares y provincias en la vida regional. Los sectores excluidos empezaron a retomar conciencia de sí mismos, de su condición de excluidos. Y desde este re-emergir de conciencia se comienzan a disputar visiones diferentes de desarrollo a la clase dominante.

La construcción de conciencia es también favorecida por el contexto nacional, donde el fracaso del modelo de desarrollo impuesto por la clase dominante en función de gobierno y la desacreditación de los partidos políticos generan la desconfianza de los sectores empobrecidos sobre la clase dominante y sus planes de desarrollo, que se muestran claramente sólo como planes de apropiación del excedente que genera el gas.

Así, el Comité Cívico departamental, que es la instancia de legitimización de la estrategia de la clase dominante en el departamento de Tarija, comienza a ser cuestionado por varias organizaciones de base, como la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT) y la Central Obrera Departamental (COD), y por Comités

Cívicos provinciales, que poco a poco forman un frente de clara oposición al discurso regionalista del Comité Cívico y cuya lucha movilizadora empieza a concretar un discurso de reivindicación de clase excluida, enfocando su análisis en la crítica a las relaciones de poder que condicionan el estado de atraso y pobreza en la región.

Tanto la COD como la FSUCCT amplían sus ámbitos de lucha a la discusión de la gestión del desarrollo departamental, rol hasta el momento totalmente novedoso para estas organizaciones, que obliga a desarrollar capacidades e instrumentos nuevos al interior del movimiento obrero y campesino. La COD lidera por ejemplo un arduo y amplio trabajo de denuncia, investigación y confrontación con el Comité Cívico y la prefectura durante el año 2004 a raíz de un conflicto de visiones sobre la mejor forma de invertir los recursos públicos provenientes de las regalías en lo referido a la generación de energía eléctrica para la ciudad de Tarija. El bloque Comité Cívico-prefectura defendía la propuesta de alquilar turbinas generadoras a empresas transnacionales, mientras que el frente COD-FSUCCT más bien planteaba construir una planta generadora de energía eléctrica en base al uso del gas para abastecer al departamento y vender a mercados circundantes.

Por otro lado, la FSUCCT construye su plan de desarrollo rural para el departamento, instrumento que se constituye en el mecanismo para disputar los recursos económicos provenientes del gas. Con esto busca incorporar en la planificación departamental su estrategia de desarrollo rural, pero rápidamente se enfrenta de nuevo a la realidad de la exclusión, ya que la prefectura departamental define las prioridades de inversión en base a intereses de la clase dominante y no asigna recursos para ejecutar obras priorizadas por la organización campesina, que debe recurrir a la realización de movilizaciones con bloqueos de caminos tanto en 2003 como en 2004 y 2005, logrando firmar acuerdos con la prefectura para realizar proyectos priorizados por los campesinos, que finalmente no son ejecutados. A raíz de esta experiencia, la FSUCCT se plantea controlar directamente la prefectura para implementar desde allí su estrategia de desarrollo rural, para lo cual hace crear la Unidad de Desarrollo Rural de la Prefectura de Tarija, también mediante la presión del bloqueo de caminos, y construye su propio instrumento político para terciar en las elecciones de prefecto a realizarse en diciembre de 2005 con el objetivo de tomar el control de esta institución en alianza con los sectores populares del departamento.

La confrontación de visiones en Tarija se debate en una disputa por consolidar un discurso regionalista que promueve la clase dominante como estrategia de control regional, y una lucha por emancipar el discurso de lucha de clases a partir de la construcción de conciencia de sí mismos de los sectores excluidos, en la que destacan la COD, la FSUCCT y en menor medida los pueblos indígenas por su capacidad de resistencia en la evolución del conflicto.

Esta lucha social en Tarija se desarrolla de manera simultánea con las luchas a nivel nacional, en las que los movimientos sociales del occidente posicionan un discurso en torno a la nacionalización de los hidrocarburos, cuestionando el modelo de desarrollo vigente. En el nivel regional los conflictos disputan el control sobre el excedente, y a través de sus conceptos cuestionan al modelo de desarrollo, coincidentemente con los movimientos sociales a nivel nacional.

Así, a nivel regional la lucha social se centra en los planos de la conquista de ciudadanía y reconocimiento de la identidad diferenciada y de la condición de exclusión de los sectores movilizados, y en la disputa por el excedente del gas y la participación en la gestión del desarrollo departamental. Esta característica del conflicto social en el departamento se diferencia del conflicto social a nivel nacional debido a la presencia de las regalías por la venta del gas, cuya magnitud y disponibilidad real proveen otro marco para la confrontación de discursos. Primero, la disponibilidad de recursos económicos en el presupuesto departamental provee un marco de incentivos propicio para la articulación de la acción colectiva de los diferentes actores sociales del departamento, y la disputa se presenta con gran intensidad en el plano de la construcción de propuestas de desarrollo que compiten entre sí. Pero, por otro lado, la presencia de capital en cantidades importantes en la región, aunque sea proveniente de la venta de un recurso natural no renovable, también genera un ambiente favorable para la consolidación de las estructuras clientelares que han servido para perpetuar a la clase dominante en su condición de privilegio en la vida regional, y son un factor de desmovilización de los sectores populares empobrecidos, sobre todo del área urbana, que dependen en gran medida de la red clientelar que proveen estructuras como los partidos políticos para acceder a ingresos económicos.

Bibliografía

PIEB-JAINA 2005 "Cronología del conflicto de la guerra del gas. Clasificación hemerográfica" en *Nuevo Sur* 2003-2005.

Prada, Raúl 2004 *Largo octubre* (PLURAL).

Vacaflares, C. 2005 *Discursos y relaciones de poder en la constitución de la región de Tarija* (Bolivia: PIEB).

Nota

1 Para ampliar la información de este tema ver revista *OSAL* N° 12, dossier "La Guerra del Gas en Bolivia"; particularmente los artículos de Raúl Prada Alcoreza y Silvia Escobar de Pabón.